

«El Gobierno Popular apela a la conciencia y sentido de clase de todos los trabajadores. Sus logros sociales, sus libertades políticas, sus organizaciones, su poder para desafiar a la fuerza del capitalismo nacional e imperialista y su capacidad para edificar la nueva sociedad son grandes instrumentos. La reacción nacional e internacional pueden destruirlos. Pretenden arrasar las conquistas de los trabajadores. Ante una amenaza tan real y presente, los trabajadores no permitirán que se les use. Sus reivindicaciones económicas no pueden ser utilizadas por la burguesía contra el Gobierno y el proceso revolucionario. La disciplina social y el esfuerzo consciente deben marcar la ruta del trabajo. Chile exige mayor producción, una mayor productividad.»

Pero ya nadie quería escuchar a Salvador Allende entre los servidores políticos de la oligarquía y el imperialismo. La orden había llegado desde Washington y, por mucho que Allende se esforzara por convencerlos, su destino estaba marcado: debía ser derrocado. Las palabras del diputado nacional (y miembro secreto de la organización fascista Patria y Libertad), Hermógenes Pérez de Arce, comentando el mensaje, fueron elocuentes: «Este mensaje sólo puede servir para convencernos de cuán necesario es para nuestro país deshacerse de esta generación de demagogos... Que el señor Allende deje de hablar... y dé paso en Chile... a quienes sepan gobernar.»

Nuevo paso adelante

En verdad el presidente Allende tenía razón para estar desesperado. La ofensiva reaccionaria pedida por los generales en contacto con el Pentágono estaba llegando a una violencia tremenda. El mes de mayo marcaba ya el segundo mes de una gravísima huelga de los trabajadores de El Teniente, mineral de cobre nacionalizado. La huelga había comenzado el 20 de abril y estaba siendo manejada por el grupo de Frei en estrecha alianza con la organización fascista Patria y Libertad.

De acuerdo a los cálculos correctos de los reaccionarios, la crisis económica debía provocar un gran aumento de las huelgas de trabajadores por mayores aumentos de sueldos y salarios, lo cual, una vez más, serviría para agudizar esa misma crisis económica, ya que el Gobierno Allende era incapaz de ensayar una salida de la crisis que echara sobre los hombros de la oligarquía

el peso de pagar las consecuencias vía mayores tributos a las ganancias de capital e incluso la renta personal. En este esquema, sobre todo a través de las organizaciones sindicales de la Democracia Cristiana, los propios dirigentes de la Sociedad de Fomento Fabril se encargaron de influir en las huelgas de los trabajadores.¹⁰

Un caso típico fue el de la huelga de El Teniente en la que se exigía un sobreaumentado de salarios del 41 %. A través de Guillermo Medina, dirigente máximo de los trabajadores en huelga, la Democracia Cristiana se apoderó del movimiento reivindicativo y transformó la lucha justa de esos obreros por mayores salarios en un arma contra el aparato de Gobierno de la Unidad Popular, para minarlo, cumpliendo con las instrucciones de los generales. El dirigente Guillermo Medina fue puesto en contacto con el periodista Manuel Fuentes Wedling, de la jefatura de la organización Patria y Libertad, y era este Fuentes el encargado de escribir los discursos de Medina, tanto en El Teniente como en Santiago (así se descubrió más tarde, después del abortado *putsch* del 29 de junio, que desarmó la jefatura de Patria y Libertad y permitió el allanamiento del domicilio de Fuentes, donde se encontraron los borradores de discursos dichos por Medina en abril y mayo).

La huelga duró más de dos meses y, durante mayo, fue transformada en el centro de un movimiento huelguístico general controlado por la Democracia Cristiana para acorralar al Gobierno. El 23 de mayo, unos veinticinco mil estudiantes pertenecientes a centros de alumnos de la Universidad de Chile controlados por el PDC paralizaron sus actividades en apoyo de los mineros de El Teniente. El mismo día, la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago, también en manos del PDC, hizo igual paralización de actividades. La situación se hizo más clara ese día, cuando en Rancagua, ciudad cercana a El Teniente, grupos de choque fascistas y del PDC asolaron la ciudad, transformando una manifestación pública «en apoyo de la huelga» en un ataque con armas de fuego, pedradas y otras armas contundentes a la Intendencia de la ciudad y al local regional de los partidos comunista y socialista. El jefe de las Fuerzas Armadas de la ciudad, teniente coronel Cristian Ackercknecht, desplegó sus soldados, ¡pero en contra de los atacados!, y allanó el local del partido socialista «en busca de armas». La situación era bastante ridícula porque mientras los soldados del teniente coronel Ackercknecht entraban «a la guerra» en el local del partido socia-

lista, a pocos metros de ellos, en la calle, miembros del grupo fascista Patria y Libertad ocultaban sus revólveres bajo sus chaquetas o transformaban sus bastones de ataque en «astas de banderolas».

La acción antisocialista del jefe militar de la ciudad provocó una declaración enfurecida de la directiva nacional del partido socialista (a la cual pertenecía el presidente Allende), exigiendo la destitución de su cargo del teniente coronel Ackercknecht. Pero no ocurrió así. El comandante en jefe subrogante del Ejército, general Augusto Pinochet, envió más tropas a la ciudad, por lo cual puso al mando a un oficial de mayor graduación, el coronel Sergio Ibáñez, pero al mismo tiempo emitió una declaración pública en que decía, «en forma enfática», que «las medidas adoptadas por el oficial a cargo de la Zona de Emergencia el día 23 de mayo cuentan con mi más irrestricto apoyo, respaldo y conocimiento».

Una vez más, frente a la tamaña insolencia política del jefe del Ejército chileno, las directivas de los partidos de la Unidad Popular guardaron silencio, y los generales conspiradores siguieron montando su esquema de ocupación militar de todo el país «para una fecha no determinada».

Sin embargo, a pesar del enorme esfuerzo desplegado por Eduardo Frei para hacer de la huelga de El Teniente «el detonante» para la renuncia o derrocamiento de Allende, esto no ocurrió porque los generales estimaron que «no estamos preparados todavía» y porque las organizaciones populares no dominadas por el PDC respondieron con una movilización que puso en marcha, parcialmente, El Teniente.

La actuación de Manuel Fuentes Wedling, sin embargo, es importante en este episodio porque nos permite mostrar cómo, para llevar adelante la conspiración, incluso altos dignatarios de la Iglesia Católica se mezclaron en maniobras que llegaron al asesinato. Los hechos ocurrieron así:

En marzo de 1973, por orden del cura Raúl Hasbún, (secretario del arzobispo de Santiago), se instaló en Concepción un canal de televisión filial del Canal 13TV, del que él era director, sin permiso legal. El Gobierno, cumpliendo con las leyes, montó un aparato electrónico para interferir las transmisiones de ese canal pirata de televisión (el 5) en la ciudad de Concepción. El cura Raúl Hasbún, entonces, se contactó con Manuel Fuentes Wedling, de Patria y Libertad, para pedirle «ayuda» para «resolver» el problema de las «interferencias». Hasbún le pidió a

Fuentes que buscara «un grupo de personas audaces» que destruyeran las instalaciones electrónicas del Gobierno en Concepción, que estaban impidiendo que Canal 5TV saliera al aire en buenas condiciones. Manuel Fuentes reunió a Michael Vernon Townley Welch, alias «Juan Manolo», adiestrador de armamento de Patria y Libertad por cuenta de la CIA y a los chilenos Rafael Undurraga Cruzat y Gustavo Etchepare. Con ellos formó un «equipo comando» que quedó a las órdenes del cura Raúl Hasbún, el cual planificó todos los detalles para entrar en la casa de la calle Freire 382, de Concepción, en donde estaban los equipos electrónicos del Gobierno.

El «comando» entró en la casa el 18 de marzo de 1973, robó los equipos, también asesinó al cuidador de la casa, un obrero pintor de brocha gorda llamado Jorge Tomás Enríquez González.

La investigación y el juicio que pendían sobre el cura Raúl Hasbún por «autoría intelectual» de asesinato y robo con homicidio fueron interrumpidos por el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, lo cual le salvó definitivamente, al menos mientras exista Junta Militar, de responder por sus conexiones con la CIA y con Patria y Libertad.

Pero no solamente eran personajes como el sacerdote Raúl Hasbún —que con sus comentarios sabatinos en Canal 13TV de la Universidad Católica atizó continuamente la hoguera de odio contra el pueblo por más de dos años—, los que actuaban en Chile por cuenta del Pentágono, la CIA y los consorcios norteamericanos.

Había senadores que, por lo menos no como Hasbún que amparó asesinos, se transformaron en contrabandistas de armas, bajo la protección del Poder Judicial y de los generales conspiradores. Es el caso del senador Pedro Ibáñez Ojeda.

Este parlamentario está conectado a un grupo oligárquico de Valparaíso, cuyo principal giro económico es la importación de maquinaria agrícola y la industria del café instantáneo (Sí Café). La firma Ibáñez Ojeda (del hermano del senador y propia) se dedica a importar principalmente desde Brasil. Pues bien, durante 1972 y 1973, el senador Pedro Ibáñez Ojeda puso a disposición de Patria y Libertad sus conexiones con la oligarquía brasileña para importar armas desde los puertos brasileños... dentro de las cajas de maquinaria agrícola y productos enviados a su firma. Este sistema de contrabando de armas para nutrir a los grupos terroristas fascistas chilenos funcionó sin problemas durante más de un año.

En realidad, el traficante de armas, senador Pedro Ibáñez Ojeda, era apenas un engranaje en una maquinaria enorme montada en Brasil para, a través de la Sociedad de Fomento Fabril Chilena, canalizar los fondos para el sabotaje de la economía chilena y la alimentación de los grupos fascistas. Grupos privados brasileños de grandes empresas, entré los que figuraban el magnate de la imprenta Gilberto Hubles, en colaboración con monopolistas de la metalurgia y la banca, utilizaron correos de envíos de dinero a Chile como Aristóteles Brumond, adscrito al equipo de la CIA en Brasil, o como el ingeniero Glaycon de Paiva, nervio motor del llamado Instituto de Investigaciones y Estudios Sociales (IPES), fundado en 1961 con asesoría de Washington, para «prevenir» un levantamiento popular en las Administraciones de Janio Quadros y Joao Goulart. (Para un estudio más profundo de este IPES, ver mi libro *Estados Unidos en Brasil*, Ediciones Prensa Latinoamericana, Santiago de Chile, 1965.) Estos grupos brasileños estaban detrás, en lo financiero y en lo ideológico, de los equipos de «expertos» de la Democracia Cristiana del grupo de Frei y del Partido Nacional, en la coordinación del sabotaje político al Gobierno de Allende. Orlando Sáenz estaba en contacto permanente con los brasileños de estas organizaciones, así como con grupos similares de Argentina, Venezuela y los EE.UU.

Nueva insurrección militar

En el mes de junio de 1973, la organización fascista Patria y Libertad, impresionados sus dirigentes por la efectividad de su trabajo terrorista, por la enorme penetración que habían logrado entre las organizaciones latifundistas del sur del país, y por la amplia protección que recibían de Carabineros y de las Fuerzas Armadas, decidieron montar una aventura por su cuenta. El jefe de los conjurados, Pablo Rodríguez Grez, decidió montar una insurrección militar en Santiago, que, esperaba, sería como encender un barril de pólvora en todo el país, y provocaría la rápida caída de Allende, su reemplazo por una junta cívico-militar compuesta por los presidentes del Senado (Eduardo Frei), del Poder Judicial (Enrique Urrutia Manzano) y los comandantes en jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.